

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	226
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2023-00031-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JESÚS ALCIDES PEÑUELA CEDANO
DEMANDADAS:	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
ASUNTO:	Rechaza demanda-acto no objeto de control judicial

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

El señor Jesús Alcides Peñuela Cedano, a través de apoderado especial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para que se declare la nulidad del Oficio No. 202221000136131 Id: 791095 del 19 de diciembre de 2022, mediante el cual se negó el reajuste de la asignación mensual de retiro incluyendo el 50% de la prima de actividad.

Revisado la demanda y sus anexos, se advierte que se configura la causal de rechazo indicada en el numeral 3 del artículo 169 del CPACA, pues el oficio cuya nulidad se pretende no es susceptible de control judicial.

El artículo 138 del CPACA señala que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho será ejercido por toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, por lo que podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho.

A su turno, el artículo 43 *ibídem* define que los actos definitivos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación, siendo estos los actos administrativos susceptibles de control judicial.

Sobre la clasificación de los actos administrativos, el Consejo de Estado expuso:

“Bien conocido es que los actos administrativos, según lo que en ellos se disponga, se pueden clasificar en a) actos de trámite o preparatorios, b) actos definitivos o principales y c) actos de ejecución.

Son actos de trámite o preparatorios, los actos preliminares que toma la Administración para adoptar una decisión final o definitiva sobre el fondo de un determinado asunto. Son actos definitivos o principales, los actos administrativos que en términos del artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con una determinada actuación. Y son actos de ejecución, aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación del 24 de octubre de 2013 dijo que ‘(...) un acto administrativo o acto definitivo es una declaración de voluntad, dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir, que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas. Por su parte, los actos de trámite son los que impulsan un procedimiento administrativo sin que de ellos se desprenda una situación jurídica y, los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que

pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado (...)”.

Se observa que la parte demandante deprecia la nulidad del Oficio No. 202221000136131 Id: 791095 del 19 de diciembre de 2022, mediante el cual la entidad demandada dio respuesta a la petición radicada el 9 de noviembre de ese año, en la que había solicitado: *“Reconocer, pagar, reajustar, la AMR del señor Jesús Alcides Peñuela Cedano, aumentando su porcentaje del 20% al 50% aplicando de manera ultractiva del Decreto 2070 de 2003 declarado inexecutable y acatando el régimen de transición ...”*.

A su turno, en el acto administrativo que finalmente acusó el actor, el Subdirector de Prestaciones Sociales de la entidad demandada le reiteró:

“Le informo en calidad de apoderado de señor Agente (Ra) PEÑUELA CEDANO JESÚS ALCIDES, que esta Entidad mediante oficio No. 5070 de 12/06/2008, atendió de manera clara, congruente y de fondo la petición relacionada con reliquidación de la Prima de Actividad que se encuentra devengando su poderdante dentro de su asignación mensual de retiro, cabe destacar que en dicho oficio se expusieron las razones de hecho y de derecho por las cuales no es procedente atender favorablemente la petición (se anexa copia para un mayor proveer); de igual forma es menester indicar que el oficio en comento, se envió al mencionado señor AG (Ra) , a la Carrera 3 No. 30 Bis - 12 Bloque 20 Apartamento 202 El Mirador V Etapa – San Mateo Soacha - Cundinamarca.

Teniendo en cuenta que la petición de la referencia por usted presentada, versa sobre el mismo asunto, la información contenida en el citado oficio se reitera de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la ley 1755 de 2015, que reza: “(...) Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores (...)”. Por tratarse de una información, contra este oficio no procede recurso alguno”.

A su vez, el artículo 19 del CPACA prescribe que *“Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores”*.

Es innegable, entonces, que el Oficio No. 202221000136131 Id: 791095 del 19 de diciembre de 2022 no es susceptible de control judicial ante esta jurisdicción, en la medida en que no constituye un acto administrativo definitivo, dado que no decidió el fondo del asunto, pues no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica del demandante, si se tiene en cuenta que el consabido pedimento ya había sido resuelto de fondo con el Oficio No. 5070 del 12 de junio de 2008 (fls. 53 y 54), por lo cual era este último el acto administrativo enjuiciable, ya que con dicha actuación se agotó la reclamación administrativa.

Es pertinente recordar que la acción de nulidad y restablecimiento contra el Oficio No. 5070 del 12 de junio de 2008 se puede promover en cualquier tiempo por tratarse la asignación mensual de retiro de una prestación periódica (artículo 164, numeral 1, literal c, CPACA), de tal suerte que para demandar su reajuste en sede judicial no era imperativo provocar un nuevo pronunciamiento de CASUR, pues ya existe uno definitivo y, por ende, el actor aún tiene la opción de impugnarlo a través de ese medio de control.

Así las cosas, se reitera, la decisión respecto de la cual se debió pedir el control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo era el oficio del 12 de junio de 2008 y no el acusado por la parte actora, pues de tramitarse el proceso en tales circunstancias podría dar lugar a un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda, esto es, que se expondría a la imposibilidad jurídica de emitir una decisión de fondo sobre lo pretendido.

En consecuencia, se dispone:

1. RECHAZAR la demanda de la referencia.
2. DEVOLVER a la parte actora los anexos del libelo, sin necesidad de desglose.
3. ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

4. RECONOCER al Dr. Oscar Andrés Acosta Romero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.069.537 expedida en Villavicencio y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 255043 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los fines conferidos en el poder y los anexos obrantes en los folios 58 a 75 del archivo “02.DemandaAnexos.pdf” del expediente digital.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

KPG

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a887516f045a4fd35adb97369a26ccc7701c1dbc3be685e24bd38ca9399cca06**

Documento generado en 28/03/2023 04:16:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>